

# Terror armado, terror sin armas. «Programa de Paz y Reconciliación» de la Alcaldía de Medellín y desmovilización de combatientes (2004-2006)

PEDRO RIVAS NIETO E PABLO REY GARCÍA \*

## 1. Preludio

Se ha planteado con frecuencia la necesidad de negociar con los actores armados del conflicto de Colombia para alcanzar la paz en el país. Tradicionalmente el conflicto se ha visto como una situación sin salida y tras cuarenta años de enfrentamiento armado entre el Gobierno, los grupos guerrilleros y los paramilitares la paz parece lejana, habida cuenta de que el intento de poner de acuerdo a los contendientes para que abandonen las armas y se reincorporen a la vida democrática ha fracasado. Sin embargo, si de verdad depusieran su actitud los combatientes, se calcula que deberían reintegrarse a la vida civil unas 40 000 personas. De momento la posibilidad de que así sea es remota, pero el proceso negociador llevado a cabo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el aglutinador de los grupos paramilitares del país<sup>1</sup>, que ha aceptado –al menos formalmente– dejar las armas, eleva el número a las 20 000 personas<sup>2</sup>. Es un desafío tremendo para el Estado colombiano, pues reconducir a quienes se han dedicado a la violencia durante años es costoso en tiempo, en esfuerzos y en dinero.

---

\* Profesores da Facultad de Comunicación. Universidad Pontificia de Salamanca. (privasni@upsa.es; preyga@upsa.es)

Conviene recordar el ejemplo de los países de América Central que tras los conflictos con grupos de insurgentes y las negociaciones posteriores no resolvieron bien la reintegración de los excombatientes a la sociedad civil. Algunos de sus errores enseñan no tanto lo necesario de la reinserción sino la conveniencia de que se haga cuidadosamente. En algunos de ellos, como El Salvador, Nicaragua u Honduras, aumentó la criminalidad y la delincuencia común propiciada, en parte, por los antiguos combatientes que no encontraron acomodo adecuado en la sociedad civil. En Colombia el problema podría ser peor, habida cuenta de que el conflicto sigue vivo y que el narcotráfico, verdadero flagelo del país, lo espolea con fuerza y lo reaviva cuando parece desvanecerse, para seguir sacando tajada. Según la UNICEF, alrededor de 11 000 niños y adolescentes son combatientes en esta guerra contra la sociedad. Por eso hay que tener especialmente en cuenta a los jóvenes desmovilizados, pues si no se hiciera así podría repetirse el fenómeno de las «maras» o pandillas juveniles de Centroamérica, nutridas sobre todo de los niños y jóvenes en los que no se pensó en los acuerdos de paz (Maya, 2006).

Para evitar este problema, en Medellín, capital del departamento de Antioquia, se ha desarrollado un modelo de reinserción cuyos éxitos han sido notables y ha atraído la atención de estudiosos de más de una veintena de países del mundo. Gentes de España, Italia, Suiza, Suecia, Reino Unido, Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá, Guatemala o Venezuela, por citar sólo a unos cuantos, han ido a Medellín a conocer el modelo de pacificación y reintegración. Su sencilla filosofía parte de la base de que sólo desmovilizando a los combatientes es posible lograr que se reintegren en la vida civil y que tras el abandono de las armas la persona que así ha decidido actuar sólo puede tener éxito en su viaje si se acompaña del Estado, de las instituciones y de la sociedad. No obstante, quienes lo han preparado son conscientes de que Colombia por sí sola no puede afrontar un plan de estas características. Es necesario el compromiso de corporaciones especializadas foráneas y de grupos que se han enfrentado a procesos semejantes. Por eso están colaborando con las autoridades de Medellín organismos internacionales y oenegés diversas tales como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –más conocida por sus siglas en inglés, USAID– junto con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Red Urbal 14 de la Comisión Europea<sup>3</sup> (Paulsen, 2006), y organizaciones como Viva Rio<sup>4</sup>, el International Action Network on Small Arms (IANSA<sup>5</sup>) y Save the Children Suecia.

## 2. El pasado reciente en Medellín. Delincuencia y violencia política

Recuérdese que aunque algunos sectores movían tradicionalmente los negocios incipientes de la droga que se localizaban en barrios céntricos de la ciudad, hasta los años sesenta no se oyó hablar en Medellín de bandas de delincuentes. Cabe señalar que los grupos armados al margen de la ley –cuando el conflicto colombiano era más acusado– se dividían en dos grandes bloques en la ciudad de Medellín: las guerrillas y los paramilitares, denominados estos últimos a veces bloques de autodefensas. Las guerrillas tenían las secciones rurales, a las que llamaban frentes, y las secciones urbanas, denominadas milicias. Los paramilitares tenían los grupos denominados bloques, ya actuaran en el campo o en la ciudad. Los agentes primarios del conflicto en Medellín eran las milicias guerrilleras y los bloques urbanos de las autodefensas (Gaviria, 2006).

Pues bien, hacia 1989 la guerrilla tenía una fuerte presencia en la ciudad de Medellín. En aquel tiempo el Estado era mínimo, su presencia precaria, había mucha delincuencia y las comunidades estaban muy afectadas por la violencia. Las milicias de la guerrilla surgieron para poner orden allá en donde las bandas de narcotraficantes eran más violentas. La guerrilla comenzó a dar seguridad a los ciudadanos porque empezó a combatir al narcotráfico y a la delincuencia común. De esta forma aumentó su presencia en Medellín. Pero tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) garantizaban la seguridad matando. Se convirtieron en grupos de limpieza social. Sin embargo, no fueron capaces de imponerse a los grupos más fuertes de narcotraficantes y acabaron pactando con ellos. A algunos dirigentes milicianos se les pegó la cultura de la barbarie y violaron su propia filosofía revolucionaria. Traicionaron a la revolución que iban a hacer en Medellín y se aprovecharon de las drogas para beneficio propio, ni siquiera para el de sus organizaciones. Al final su comportamiento y su lenguaje fueron iguales que los de los narcotraficantes.

Las milicias, que crecieron en los comienzos no tanto contra el Estado, sino contra la delincuencia común, se degradaron y se volvieron bandas de delincuentes comunes. Las gentes, hartas y asustadas, combatieron a las milicias y las fueron derrotando poco a poco con la ayuda de algunos grupos de autodefensa formados por paramilitares. De hecho la violencia en la ciudad no enfrentó sólo a simples bandas de delincuentes sino que fue un laboratorio de la guerra en Colombia. Los contendientes tenían armas de largo alcance y las tácticas de la guerra rural se trasladaron a la guerra urbana. Las matanzas, el desplazamiento y las zonas vedadas fueron habituales para ganar terreno, ocupar posiciones estratégicas y ganar adeptos. Tan sólo en la famosa Comuna 13 quedó más o menos viva la guerrilla

y en otros islotes de la ciudad el control lo tenían las autodefensas paramilitares.<sup>6</sup> Las Autodefensas llegaron a estar presentes en el 70% de Antioquia y tuvieron gran control de las comunas populares de Medellín. De hecho, la ideología que enseñaban se basaba en dos grandes ideas que criticaban la situación del país, esto es, la creciente presión de la guerrilla sobre la ciudad de Medellín y los peligros que acarrearía, y la escasa preocupación del Estado por los ciudadanos y la escasa inversión social. De esa manera ganaban adeptos.

Todos ellos, finalmente, en las comunas más humildes de Medellín, se dedicaron a la delincuencia común, bien organizada y regulada, y se integraron en las bandas, en los *combos* y en los *parches*. Su vinculación con el narcotráfico era innegable. Las milicias captaron a varios combos y luego hicieron lo mismo los bloques. Se mataron entre ellas, en verdaderas luchas de bandas por las calles de Medellín. Al final los grupos de delincuentes que estaban apoyados por los paramilitares vencieron en Medellín. Esta es grosso modo la historia reciente de la ciudad (Salazar, 2006).<sup>7</sup>

Las bandas causaron tantos problemas porque era muy difícil combatirlos en una ciudad en la que el poder del Estado —y su capacidad para el ejercicio legítimo de la violencia— era mínimo. Eran grupos de delincuentes organizados, con jerarquía de mando, territorios concretos y que se daban a conocer mediante la delincuencia (Gaviria, 2006). Muchas de ellas tomaban su nombre del entorno en el que actuaban, de sus barrios o se reconocían por el apodo —o *chapa*— del jefe. En los noventa estaban por todo Medellín, incluidos los barrios elegantes. Tanto era así que este modelo se exportó desde Medellín a Cali y a Bogotá. Su auge se debió, quizá, al bagaje de conocimientos y por eso:

En lo militar implantó el narcotráfico que luego perfeccionaron las milicias, imponiendo una disciplina a sus miembros; así, entrenamiento, disciplina y necesidad económica dieron como resultado grupos de mercenarios que trabajaban al mejor postor. Ya no eran exclusivos para el narcotráfico debido a que este había cambiado su estructura de Cartel por el de Oficinas; mucho menos de la insurgencia pues ésta les había dado la espalda cuando quisieron organizar políticamente los sectores de influencia. Sin embargo estaban abiertos a cualquier oferta con tal de que ella representara dinero y reconocimiento. (Velásquez, 2006: 105)

Las bandas eran el brazo armado de las *Oficinas*<sup>8</sup> y las distribuidoras de armas de la subversión (Ceballos, 2000: 388). Es más, gracias a los programas de paz y convivencia que querían reintegrar a los jóvenes a la legalidad lograron afianzar sus negocios. Por ejemplo, al pasar a la legalidad y participar en un programa recibían dinero mensual para adaptarse a su nueva situación y tenían cierto grado de inmunidad en los sectores en los que actuaban. Su poder aumentaba porque la Fuerza

Pública no podía actuar, ya que podían acusarla de violar los procesos de reinserción iniciados. Durante ese tiempo en el que no se les persiguió, se fortalecieron y crearon verdaderos ejércitos.

No se debe olvidar que mucha gente se integró en los grupos, en las bandas, en los combos, en las milicias o en los bloques en Medellín porque había condiciones «objetivas» para ello. Tras la guerra contra el narcotráfico quedó un vacío de poder peligroso para la convivencia y para el orden social. Era necesario instaurar un nuevo orden en los barrios y el Estado no satisfacía las necesidades mínimas de la población.

### 3. El Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía

Al firmar el Acuerdo de la Ceja<sup>9</sup> entre los portavoces del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Alto Comisionado para la Paz el 17 de diciembre de 2003<sup>10</sup> se estableció que en un período de año y medio los desmovilizados del BCN debían reincorporarse a la vida civil. La responsabilidad política de la reintegración estaba en el Gobierno de Colombia, representado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Sin embargo, la Alcaldía de Medellín se comprometió a cooperar intensamente desarrollando programas de reinserción.

Al mismo tiempo la ONG Corporación Democracia –representante de los reincorporados del BCN– se comprometió a colaborar con las autoridades, se contó con la supervisión del Sistema de Análisis, Monitoreo y Evaluación (SAME) de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y al proceso se sumó también la Organización de Estados Americanos (OEA) en colaboración con la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Es fundamental el compromiso de la OEA pues el mandato de la misión que se le encomendó –con fecha de 23 de enero de 2004– era acompañar y verificar los procesos de paz del Gobierno con los grupos armados ilegales. La misión abrió su oficina regional en Medellín el 15 de marzo de 2004.<sup>11</sup>

En este complejo entramado la OEA cooperaba con la misión de apoyo al proceso de paz verificando el cese del fuego y la reincorporación de los excombatientes. La FUPAD y la USAID promovieron el empresarismo en jóvenes vulnerables ubicados en la zona del MetroCable<sup>12</sup> y colaboraba en la promoción de jóvenes no desmovilizados. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala aportó cooperación técnica e intercambió experiencias relativas al proceso de su propio país. La Red URBAL 14 elaboró un proyecto para prevenir el ingreso de la

población infantil y juvenil en actividades delictivas o en grupos al margen de la ley. Y las ONG prepararon un proyecto para desarmar, desmovilizar y reintegrar a la vida civil a niños y jóvenes dedicados a la violencia armada organizada, para que supieran adaptarse a las situaciones posteriores al conflicto.

En este complejo entramado destaca el desarrollo por parte del Gobierno municipal de Medellín del Programa de Paz y Reconciliación –sin duda el cambio más importante desde el Acuerdo de la Ceja– como elemento fundamental del proceso de reincorporación de los desmovilizados del BCN a la vida civil. Es sin duda importante porque tras el vencimiento de los Acuerdos de la Ceja –17 de junio de 2005–, es decir, del año y medio estipulado, tan sólo presta atención a los desmovilizados el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. Este asunto no es baladí pues no sólo se desmovilizó el BCN sino que también lo hicieron otros bloques de las AUC. Como el Gobierno de Colombia pretendía que los excombatientes regresaran a sus poblaciones de origen la ciudad de Medellín recibió a buen número de personas. Ocurrió algo curioso: desde enero de 2005 se decidió que los desmovilizados de otros bloques de Antioquia fueran atendidos por el Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y Justicia. Su oficina de Medellín se convirtió en el Centro de Referencia y Oportunidad (CRO) de Antioquia, que no estaba preparada para acometer esta empresa. La consecuencia de esta política errada fue que hubo dos grupos de desmovilizados, los excombatientes del BCN –a los que atendía el programa de la Alcaldía de Medellín– que eran los más beneficiados, y los de otros bloques –a los que atendía el CRO/Antioquia (Cordón, 2006: 206)–. Al final se tomó la decisión de distribuir geográficamente las responsabilidades entre ambos y el Programa de Paz y Reconciliación se encargó de atender a los desmovilizados colectivos<sup>13</sup> de los municipios del área metropolitana<sup>14</sup>.

### 3.1. Apuntes previos

Para poder enfrentarse a su reincorporación a la sociedad hay que saber a qué se habían dedicado los integrantes de un grupo armado ilegal y entender las causas por las que lo habían hecho. Y los estudios<sup>15</sup> demostraron que la militancia previa era, cuando menos, curiosa: el 1% de quienes se integraron en las AUC habían estado anteriormente en las FARC, el 9% en las Fuerzas Armadas y el 37% en bandas de delincuencia común. Es decir, casi la mitad no ingresó directamente en el paramilitarismo, sino que habían militado en otros grupos. El 48% –eso sí– se unió directamente al BCN y el 5% a otros grupos de las AUC.

También resultan curiosos los motivos por los que alguien decidía integrarse en un grupo paramilitar. La muerte de un ser querido –alguien que había perdido la vida de forma violenta en el conflicto– era, junto con las amenazas externas y la necesidad de protegerse ante ellas, el motivo principal, pues el 50% de los «paras» se habían incorporado a las AUC por alguna de estas dos causas –25% por cada uno de estos motivos–. La situación económica apurada que necesitaba una salida rápida, con el 23%, era la siguiente causa, a la que seguían motivos diversos –el 20%– y los conflictos con la familia, los vecinos o los amigos –el 7%–. Es decir, la necesidad de protección y la venganza, dos motores fundamentales de la acción humana, incitaron a más del 50% de los miembros de las AUC a incorporarse a ellas.

Del mismo modo los motivos para abandonar las armas e intentar reintegrarse a la vida civil los encabezaba la necesidad de cambiar de vida –con un 35,25% de los desmovilizados–, obtener beneficios del Estado, especialmente económicos o penales –un 34,58%–, por deseos de sus familias –el 18,56%–, para borrar penas judiciales –el 6,14%– y, por último, por cumplir las órdenes de las AUC –el 5,57%–.

Estos datos son muy interesantes porque dan pistas sobre el modo en que se debe organizar la reinserción. Si es cierto lo que afirman las autoridades de Medellín el grueso de sus miembros lo eran a consecuencia del desamparo social y emocional, por ejemplo. Y que las ganas de regresar a una vida alejada de la violencia eran compartidas por un elevado porcentaje de los combatientes. Por eso las ideas que se entresacan de estos informes al menos sugieren que la desmovilización, en el plano político, sólo podrá funcionar bien si se gestiona como una cuestión colectiva. Pero para que sea eficaz deberá adaptarse a cada individuo.

### **3.2. Modelo de intervención**

El modelo de intervención se resume de la siguiente manera: el plan de paz y de reconciliación tiene diferentes áreas de intervención; hay que educar a los excombatientes porque muchos de ellos apenas tiene formación; hay que dar acompañamiento psicológico y social tanto a los desmovilizados como a sus familias y a las víctimas; se necesita generar ingresos para que puedan trabajar por sí mismos en algo honrado cumpliendo las leyes; es necesario fortalecer las instituciones para que se respete a las autoridades; hace falta garantizar la seguridad de los ciudadanos, su salud y que las leyes amparen a todos; y al mismo tiempo hacen falta proyectos para acometer el futuro. Por todo esto vela la OIM y verifica el cumplimiento del proceso de paz y la reintegración efectiva la OEA.

¿Qué se empezó a hacer con quienes se acogían al plan de reinserción? Los desmovilizados necesitaban para reinsertarse formas de adaptación social y a la vez apoyo económico. Téngase en cuenta que en ambas ha de estar presente el Estado haciendo un seguimiento individualizado de cada excombatiente porque si no es así el fracaso está garantizado. El seguimiento individualizado permite adivinar en qué momento el excombatiente está preparado para formar parte de forma solvente de la sociedad. Por eso era necesario que los excombatientes, antes de encontrar empleo o poner un negocio, se adaptaran a la vida normal y pasaran por una fase de educación, de formación en valores y de atención psicológica y social. No sólo ellos, sino también sus familias y las comunidades en las que habitaban. La misma Corporación Democracia reconoce el acierto de haberlo hecho así. Por eso la Alcaldía de Medellín preparó un programa de intervención llamado Regreso a la Legalidad que intentaba que los desmovilizados, sus familias y sus comunidades se imbuyeran del espíritu necesario para cumplir la ley. Este principio –se afirmaba– podría servir para futuras desmovilizaciones.

El modelo de intervención psicosocial del Ayuntamiento de Medellín quería formar en valores, construir la convivencia pacífica y reducir las conductas agresivas intentando fortalecer la reparación y la reconciliación, reforzando la confianza, promocionando el desarrollo comunitario y dando atención psicológica personal y comunitaria tanto a víctimas como a victimarios. En esta área de acompañamiento psicológica y social un coordinador se ocupaba de dirigir a treinta profesionales, que a su vez dirigían a 78 líderes comunitarios –cuya misión era la de servir de orientadores–, y cada uno de ellos acompañaba a 37 desmovilizados –es decir, en total eran 2 885 personas–. Al mismo tiempo cada uno de los treinta profesionales capacitaba a tres líderes directos, atendía a las familias de los desmovilizados –97 familias– y apoyaba el trabajo comunitario de líderes, desmovilizados, familia y comunidad. La atención individual se refería a la salud de la persona, a su capacitación para adaptarse a su nueva situación. La familiar se refería a la vida en pareja, a dar terapia familiar y a evitar la violencia en la familia. Y la comunitaria se preocupaba por la organización social y por la participación en la sociedad (Alcaldía de Medellín, 2006: 128). Este modelo resultó ser bastante eficaz.

Al mismo tiempo que se hacía esto era necesario el apoyo económico. Es imposible salir adelante e integrarse en la sociedad sin dinero. Era difícil que los desmovilizados encontraran un empleo decente porque su nivel educativo era muy bajo. El 83% de los desmovilizados tenía incompleta la educación primaria, o había completado ésta pero no la secundaria. De hecho tan sólo el 1% tenía estudios universitarios. De ahí que en el plan de desmovilización una de las herramientas

básicas fuera formar a quienes se acogieran a él (Gaviria, 2006). Si no se hiciera así, la falta de oportunidades podría ser una buena excusa para volver a delinquir.

Al formarlos se intentó prepararlos para el mercado laboral y para socializarlos. El Servicio Nacional de Aprendizaje –más conocido por sus siglas, SENA– impartió el llamado «módulo cero» para la población desmovilizada la cual, tras los cursos recibidos, accedía a contratos de aprendizaje acompañados por el SENA y por el Programa Paz y Reconciliación. De hecho, durante 2004 la mitad de quienes se beneficiaban del programa Paz y Reconciliación trabajaron para el sector público –contratados por las Secretarías y los Entes Descentralizados de Medellín– y el resto se dedicó a otras tareas. Todos se dedicaron a actividades tales como la limpieza de quebradas, de hospitales, al barrido de las calles de la ciudad, al fumigado de plagas... o a aspectos de carácter pedagógico como promover la convivencia o enseñar a cuidar las cuencas.

### **3.3. Reparación a las víctimas y efecto en la comunidad**

No se trata sólo de reincorporar a los excombatientes por su propio bien, sino de lograr que las comunidades vuelvan a vivir en paz. Es más, tal y como afirma la controvertida ley llamada de «Justicia y Paz»<sup>16</sup>, se debe reparar a las comunidades dañadas por la violencia de los grupos armados.

Las formas de reparación habían de ser directas y en ellas se debía de fomentar la confianza entre las partes, esto es, la comunidad –en donde se quería que participaran activamente las víctimas–, los excombatientes, el gobierno municipal y, por supuesto, el Gobierno de la nación. Habida cuenta de que la mayoría de los que aceptaron el plan encontraron ventajas, como tranquilidad en su vida cotidiana, seguridad, respeto en sus comunidades o estar a bien con la Justicia, buena parte de las acciones emprendidas fueron exitosas. Por ejemplo, en las Comunas 8 y 9 –representativas de la violencia en la zona centrooriental de Medellín (Nieto y Robledo, 2006: 66-99)– se atendió a 600 víctimas del conflicto<sup>17</sup>; se reunió a víctimas y victimarios para que intentaran fortalecer los lazos comunitarios y resolver los problemas conjuntamente, se informó a un grupo elevado de personas sobre el paradero de sus seres queridos perdidos en desapariciones forzosas<sup>18</sup>; se devolvieron algunas propiedades y viviendas tomadas a la fuerza; se orquestaron actos y labores en las que los excombatientes intentaban que los niños de las zonas que se les encomendaron transformaran sus modelos y a sus ídolos y cambiaran las armas por cuadernos para estudiar... Al mismo tiempo hubo actividades que, aunque simbólicas, eran muy importantes, como sembrar flores que recuerden a

las víctimas de la violencia y que las homenajeen cuando florezcan; pintar murales; o hacer caminatas conjuntas de víctimas y victimarios para compartir ideas y futuro (Cordón, 2006: 208).

Sin embargo, es insoslayable un hecho que no cabe olvidar: las gentes que nunca tuvieron nada que ver con la violencia y que jamás la ejercieron para beneficiarse podían sentirse marginados pues Medellín no era un lugar suficientemente próspero. En frase sencilla recogida por los técnicos del ayuntamiento de boca de un joven, «uno tiene que ser un delincuente para que le den oportunidades». Por eso se pensó que a la población que no coqueteó con los grupos alzados en armas y cuyo origen social era humilde había de dársele también oportunidades. Se creó el plan «10 000 jóvenes con futuro», para gentes de entre 16 y 29 años que quisieran continuar con sus estudios.

Lo que acabamos de relatar funcionó muy bien, pero las gentes corrientes eran remisas a aceptar a quienes habían combatido al margen de la ley. Desconfiaban de quienes les habían violentado y aún hoy, a comienzos de 2007, siguen haciéndolo.<sup>19</sup> Más del 40% de quienes tenían dificultades para aceptar a los desmovilizados decían no hacerlo por resentimiento, un sentimiento razonable y legítimo. El miedo y la desconfianza le seguían en importancia, con casi el 30%. Finalmente, en un porcentaje menor, estaban quienes no creían en la posibilidad de que el plan de la Alcaldía pudiera ser eficaz. No hay que olvidar que para los habitantes de la ciudad de Medellín el éxito del plan de desmovilización no es una cuestión de estadísticas ni un laboratorio de pruebas para futuras desmovilizaciones en otras zonas del país<sup>20</sup> o del mundo, sino algo en que lo que está en juego es la vida de la comunidad. Es cierto que actualmente hay más paz social y que han disminuido los crímenes en un 70% (Unidad de Convivencia Ciudadana, 2005; COSED, 2004)<sup>21</sup>, pero buen número de ciudadanos sigue viviendo con temor.

Es verdad que a día de hoy las autoridades han ocupado el terreno que estaba en manos de los paramilitares pero aún hay que restaurar la confianza entre el Estado y las comunidades, tarea harto difícil. Hay que reconocer que a las AUC se les tiene todavía tanta estima como desprecio, según en dónde y según cuál fuera su comportamiento. Esto ahonda la brecha social. Se producen conflictos a veces cuando los representantes de los excombatientes quieren formar parte de las Juntas de Acción Comunal de los barrios pues chocan con los líderes establecidos en ellos. Los desmovilizados reclaman su derecho a participar en el trabajo comunitario de sus barrios pero algunos ciudadanos dicen que están ocupando esos espacios por medio de la presión y la coacción. Ambos tienen razón. Los desmovilizados se quejan de estas críticas porque dicen que participan democráticamente y en algunos barrios los excombatientes cuentan con el apoyo de la

gente porque han sabido convertirse en verdaderos líderes sociales. No obstante, en otros lugares los desmovilizados presionan a sus convecinos empleando métodos mafiosos.<sup>22</sup>

A veces los vecinos acuden a los antiguos combatientes como si continuaran siendo la verdadera autoridad, los buscan tan sólo para resolver problemas, como ocurría antes, y los desmovilizados que quieren reintegrarse de veras en la comunidad no pueden hacerlo, porque cuando remiten a la gente a la policía y a las autoridades no les hacen caso. Este es uno de los problemas fundamentales: el hecho de que la administración de justicia se siga encomendando a los antiguos bloques porque en algunas comunas las gentes recurren todavía a los actores armados para resolver problemas. Se les sigue reconociendo la autoridad para impartir justicia.<sup>23</sup> Y no debe olvidarse que aún algunos excombatientes siguen vinculados a sus antiguos comandantes de las AUC y las decisiones importantes se siguen consultando con ellos. En la Corporación Democracia sigue habiendo jerarquía y disciplina militar, por ejemplo.

De hecho una de las recomendaciones que la misión de la OEA encargada del seguimiento del asunto ha hecho ha sido la de estudiar detenidamente este asunto y purgarlo cuanto antes. La Oficina regional ha recibido denuncias de gentes que aseguran que los desmovilizados han violado el cese de hostilidades, pero es difícil verificarlo. Los actos se confunden a veces con la delincuencia común y es posible que algunos delincuentes comunes se hayan hecho pasar por antiguos miembros de las AUC (Cordón, 2006: 210).

Sea como sea no es admisible que al amparo de las garantías del plan se vuelva a delinquir o se constituya de nuevo un *paraestado* al margen del Estado colombiano. De hecho en el plan de la Alcaldía, si un excombatiente vuelve a las andadas o se dedica a delinquir acostumbrado como estaba a una vida violenta, se aplica una estricta justicia. El poder público tiene la obligación de ejercer su poder punitivo porque si no lo hace la posibilidad de que aparezcan nuevos grupos armados ilegales es elevada. Téngase en cuenta que los insurgentes, ya fueran guerrilleros o paramilitares, no sólo dañaban la estabilidad estatal o institucional, sino que cometían graves delitos contra la sociedad propios de grupos de delincuentes comunes –extorsión, robo, violación, amenazas...-. Por tanto el poder coactivo del Estado debe emplearse sin miramientos si los desmovilizados no cumplen lo pactado y no se integran en la sociedad como ciudadanos de bien. Uno de los problemas del Estado colombiano ha sido su inoperancia y su incapacidad de ejercer la soberanía en todo el territorio. No obstante, no ha sido necesario recurrir a la fuerza porque el grueso de quienes se acogieron al plan ha respetado escrupulosamente su condición de nuevos ciudadanos.

Por eso cabe decir que el Programa de Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, pese a las dificultades objetivas y a los desaciertos, ha sido un éxito. El coste del Programa es elevado –cada beneficiario del programa de la Alcaldía cuesta unos 8 800 000 pesos anuales (Gaviria, 2006)<sup>24</sup>– aunque cabe decir que los beneficios para Medellín y el resto del país son incalculables. Es cierto que aún no se han desmovilizado todos los miembros de las AUC –el comandante Adolfo Paz, al cual se le consultaban todo tipo de cuestiones de hondo calado, es ejemplo de esto– pero la reintegración del BCN permitió avanzar en las desmovilizaciones. Será necesario desmovilizar a las AUC en todo el país y en el mismo Medellín hacerlo con las bandas y combos:

No sólo porque son actores primarios de la violencia sino porque dicha desmovilización permitiría, de cierta manera, completar la desmovilización [...] y dismantelar, desde la base, la red que se encarga de regular la violencia en Medellín y donde existen fuertes elementos de presunción que indican que dicho aparato está bajo el mando de las AUC. (Cordón, 2006: 214)

No obstante, todos estos avances necesitan del amparo y del apoyo de la comunidad internacional.

#### 4. Valores interculturales y comunicación

Si en Medellín, ciudad castigada durante decenios tanto por guerrilleros, paramilitares y Fuerza Pública como por narcotraficantes –recuérdese la gran violencia de los años ochenta con Pablo Escobar a la cabeza– se logró imaginar un plan de desmovilización de paramilitares que, en poco tiempo, llevó prosperidad y paz a aquella tierra, cabe mantener la esperanza. Se puede confiar en el Plan de Paz y Reconciliación de la Alcaldía y en planes similares. Aquél no era milagroso, sino que, gracias al compromiso de la comunidad entera y a la transformación de los valores imperantes durante dos generaciones, ha logrado transformar la violencia en concordia y la guerra en reconciliación. Por supuesto que siguen existiendo problemas, pero ha cambiado la vida cotidiana. Los valores *globales* de paz universal y respeto de los derechos del hombre emanados de los pensadores ilustrados europeos dos siglos antes –muchos de ellos, principios secularizados del cristianismo– y reaparecidos tras la caída del Muro de Berlín, se trasladaron a los criterios *locales* de una ciudad sudamericana como Medellín. Es ejemplo manifiesto de la movilidad de ideas propia de la globalización y aunque ésta nos parezca una singularidad propia de nuestro tiempo, hay quienes trasladan su origen incluso a finales del siglo xv, al

tiempo de la conquista de América, de la evangelización y de la expansión de los países de Europa Occidental (Morin, 2002: 30-31).

Huelga decir que hace cinco siglos casi todo, incluida la comunicación, era unidireccional. Los valores y las ideas no rebotaban del este al oeste o del norte al sur. La historia de la conquista de América nos enseña que la civilización occidental venció gracias a su superioridad en la comunicación humana y que, no obstante, la supremacía se afirmó a expensas de la comunicación con el mundo (Todorov, 1987: 261). Hoy en día el hambre, la guerra o la enfermedad siguen afectando al ser humano, a veces incluso en mayor medida de lo que lo hizo en tiempos pretéritos y América ofrece no pocos ejemplos. Pero es nueva la prodigiosa habilidad que el ser humano ha adquirido para moverse de un lugar a otro, como también lo es la capacidad de las ideas y de los valores para saltar de un continente a otro. Todo esto ha posibilitado la comunicación intercultural.

Sin embargo, los medios de comunicación internacionales apenas se hicieron eco de un modelo novedoso que había llevado a expertos mundiales a Colombia para estudiarlo. Quizá sí los medios locales, los periódicos, las emisoras de radio (Rivas y Rey, 2006)<sup>25</sup> y las televisiones, volcados en seguir el proceso de desmovilización pese a la pobreza narrativa de sus relatos y a su carácter simplificador –y, todo sea dicho, mucho menos optimistas que las autoridades al interpretar los resultados del plan–. Los medios de comunicación importantes de este lado del Atlántico no se interesaron en el Programa de Paz y Reconciliación porque no interesa tanto la firma de un acuerdo de paz como el crimen. Aunque la vida de la comunidad está aún perturbada no atrae tanto la barbarie sin límites como la explicación sensata y fría de un asunto complejo: un plan que bebe de valores universales, útiles en cualquier lado del mundo y válidos para la convivencia, para la reintegración a la vida civil de combatientes. En él no hay nada televisivo ni catastrófico que permita contar una buena historia y aunque Heidegger recordara que con frecuencia las palabras son en la Historia más poderosas que las cosas y los hechos (Heidegger, 1961: 400) no parece que se le haga mucho caso. La destrucción del orden natural de las cosas atrae a los periodistas siempre que sea posible contarlos (Rivas, 2006: 172) pero no es fácil hacerlo en Medellín como no era fácil hacerlo en Yugoslavia. Las palabras de Misha Glenny, el reputado redactor jefe de la BBC experto en asuntos balcánicos, que decía que a los directores de los periódicos no les gusta Yugoslavia porque es demasiado compleja son aplicables a este caso. Porque Medellín es compleja. Sin embargo no puede soslayarse lo complicado porque no sea fácil contarlos. La Historia, nos guste o no, también se construye desde el presente, del que nuestros medios de comunicación son los heraldos (Rey, 2006: 208).

La «comunicación» y la «información», tan necesarias para la transmisión de los valores y para contribuir a la consolidación de un modelo pacificador en los tiempos globalizados, no trasladaron a las gentes de otras tierras tan singular iniciativa. Y a nuestro entender ese error es uno de los elementos que dañó aquel proceso y que debilita procesos similares. Porque, ¿no sigue creyendo el grueso de la gente que Medellín es una de las ciudades más peligrosas del mundo, aunque ya no sea cierto?<sup>26</sup> ¿No opinan algunas instituciones que no merece la pena involucrarse en asuntos de paz en países de América del Sur, porque aquellas naciones son incapaces de solucionar sus propios problemas? ¿No es habitual escuchar que las ideas de Occidente no llegan a aplicarse en otros lugares porque sus tradiciones son incompatibles con la democracia? ¿No se suele decir que la Iglesia –que en el caso de Medellín ha desempeñado magistralmente su papel pacificador (Giraldo, 2006; Gómez, 2006)– es incapaz de enfrentarse a los retos de los nuevos tiempos? Tópicos, tópicos extendidos que ejercen notable influencia en el pensamiento actual, precisamente porque la comunicación en la sociedad global y la transmisión de nuevos valores han fallado.

En los tiempos actuales es difícil lograr éxitos verdaderos en la reconciliación de sociedades en las que la violencia campa a sus anchas si la comunicación internacional no se involucra suficientemente. No es nimio este asunto porque si es verdad que la comunicación puede ser aliada de la violencia más descarnada (Sánchez, 2006: 114), también lo es que la falta de comunicación puede tener los mismos peligrosos efectos. Es peligroso informar tendenciosamente de los conflictos irreales e inventados, no informar de nada o sesgar conflictos reales. Donde la gente muere. Y no de amor, precisamente (Rey, 2006: 268).

## NOTAS

- <sup>1</sup> Cabe recordar que las AUC las formaban el Bloque Cacique Nutibara, el Catatumbo, los Héroes de Granada, el Pacífico, el Occidente, los Bananeros y otros grupos menores. Es un número elevado que da idea de la ardua tarea que supone reintegrar a tanta gente a la sociedad civil.
- <sup>2</sup> El resto son los miembros de las organizaciones guerrilleras que aspiran –oficialmente– a derrocar al Estado colombiano e implantar un sistema marxista en el país.
- <sup>3</sup> Es un programa entre la Comisión Europa y varias ciudades de Iberoamérica para aumentar la seguridad ciudadana en la ciudad. Quiere fortalecer los lazos entre las entidades locales de Europa y Latinoamérica mediante la difusión, adquisición y aplicación de prácticas idóneas en las políticas urbanas de seguridad ciudadana. Ver Paulsen, Gustavo, «Red 14: Seguridad Ciudadana en la Ciudad. Programa URB-AL», 2006. En [www.pnud.org.co/img\\_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/segiudadanaenlaciudadprogurbal.pdf](http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/segiudadanaenlaciudadprogurbal.pdf)
- <sup>4</sup> ONG brasileña que pretende prevenir la violencia, especialmente la propiciada por las armas cortas.
- <sup>5</sup> ONG dedicada a la misma tarea que Viva Rio.
- <sup>6</sup> En Medellín la ciudad tiene cuatro puntos estratégicos cuyo control han deseado todos los grupos desde la aparición de las milicias; Caicedo –en el sector centrooriental–; la comuna trece –en el sector centrooccidental–; el barrio de Santo Domingo –en la comuna nororiental–; y el Barrio París –en el extremo noroccidental–. Todos estos sectores tienen su historia en la presencia paramilitar.
- <sup>7</sup> Entrevista realizada a Alonso Salazar en Medellín en septiembre de 2006. Es un prestigioso periodista que cofundó la Corporación Región en Medellín para la investigación social, escribió libros de éxito y ahora es candidato a la alcaldía de la ciudad.
- <sup>8</sup> Las Oficinas eran grupos de allegados a los capos mafiosos que oficiaban como intermediarios entre los demandantes de servicios criminales y las agrupaciones barriales «que en sus zonas seguían fumando marihuana, esperando enrolarse en negocios lucrativos, entrenándose en diversas fechorías, o ensayando empresas delictivas menores por cuenta propia». Ver Ceballos, Ramiro, «Violencia reciente en Medellín: Una aproximación a los actores», en *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, número 29, tomo 3, Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, Perú, 2000, p. 388
- <sup>9</sup> Puede verse el texto del acuerdo en la siguiente página web de la Presidencia del Gobierno de Colombia: [www.presidencia.gov.co/prensa\\_new/sne/2003/diciembre/17/01172003.htm](http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2003/diciembre/17/01172003.htm)
- <sup>10</sup> También firmaron como testigos el alcalde de Medellín, Luis Pérez, y el nuevo alcalde electo, Sergio Fajardo, es decir, los que propusieron el plan del que se habla en este estudio.
- <sup>11</sup> Verifiqué la reincorporación de 868 integrantes del Bloque Cacique Nutibara y las desmovilizaciones posteriores de los bloques que decidieron regresar a Medellín.
- <sup>12</sup> El MetroCable, inaugurado en 2004, es una nueva y singular línea del Metro de Medellín. Es un sistema que llega hasta la parte más alta del barrio Santo Domingo Savio, un sector de bajísimos recursos alejado del centro y encaramado en una zona elevada. Ello supone que se está integrando a aquellos que desde los años 60 eran los desconocidos de la ciudad, los más necesitados que, frecuentemente, caían en las redes de la violencia como actores o como víctimas principales.
- <sup>13</sup> También hay desmovilizados individuales, es decir, personas que a título individual deciden abandonar a un grupo paramilitar e integrarse en un programa de reintegración a la vida civil. No lo hacen en virtud de un acuerdo entre las autoridades y un bloque, que es lo que nos ocupa.

- <sup>14</sup> Es decir, Medellín, Barbosa, Bello, Copacabana, Sabaneta, la Estrella, Caldas, Girardota, Envigado e Itagüí.
- <sup>15</sup> Estos datos –referidos a militancia previa, causas de la integración en un bloque paramilitar y motivos por los que se abandona– han sido aportados en un texto remitido a los autores de este estudio por el Equipo del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.
- <sup>16</sup> Es la ley 975/2005 impulsada por el actual Gobierno de Uribe en cuyo marco se inscriben las desmovilizaciones colectivas de paramilitares en Colombia. Su controvertido carácter reside, básicamente, en que es demasiado generosa con los paramilitares, puesto que las penas máximas para quienes se acojan voluntariamente a ella van de 5 a 8 años por delitos graves. A muchas organizaciones de derechos humanos y a la ONU les parece poco justa.
- <sup>17</sup> La ONU calificó a este modelo como buena práctica de gobierno.
- <sup>18</sup> La práctica de hacer desaparecer a alguien sin que nadie supiera nada ha sido –y es– habitual en el conflicto colombiano. Si no se encuentra el cuerpo la Justicia no puede hacer nada, y los familiares se desesperan porque no saben si la persona cuyo paradero se desconoce está viva, muerta o secuestrada.
- <sup>19</sup> Algunos líderes sociales de los barrios populares de Medellín así lo aseguraron a quienes han redactado este texto.
- <sup>20</sup> Tras la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara –a la que completó la del Bloque Héroes de Granada– las autoridades aseguraban que fue un proyecto piloto no sólo exitoso en sí mismo, sino que permitiría realizar con éxito el desmantelamiento completo de los bloques paramilitares en el futuro.
- <sup>21</sup> En 2002, año en el que comenzó el proceso de paz, se asesinó en Medellín a 3721 personas; en 2003 fueron 1177; en 2004 fueron 1177; en 2005 fueron 781 y hasta septiembre de 2006 fueron 503. Eso supone una reducción de aproximadamente el 70%. Esto según los datos de la Unidad de Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Antioquia. En [www.medellin.gov.co/AdmonContenido/EstadisticasGobierno/DocumentosEstadisticasGobierno/OtrosInformes/INFORME%20ANUAL%20DE%20HOMICIDIOS%202005.pdf](http://www.medellin.gov.co/AdmonContenido/EstadisticasGobierno/DocumentosEstadisticasGobierno/OtrosInformes/INFORME%20ANUAL%20DE%20HOMICIDIOS%202005.pdf). De hecho, pese a la mala fama de Medellín, en ciudades colombianas como Palmira, Pereira, Bucaramanga, Tulúa o Cali se mata a mucha más gente. Pueden consultarse al respecto los informes relativos a los homicidios por cada cien mil habitantes del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (COSED), de la Policía Nacional. En [www.prevenicionviolencia.org.co/observatorios/bolivar/cartagena/archivos/boletin\\_cartagena\\_2004.pdf](http://www.prevenicionviolencia.org.co/observatorios/bolivar/cartagena/archivos/boletin_cartagena_2004.pdf)
- <sup>22</sup> En entrevistas realizadas en septiembre de 2006 a ciudadanos de diversas zonas populares de Medellín estos aseguraban que los paramilitares se estaban reorganizando amparados por la ley de desmovilización y por las ventajas que les reporta.
- <sup>23</sup> Si antes los paramilitares ejercían de «jueces» resolviendo, por ejemplo, un problema de ruido en una barriada que impedía descansar a los vecinos; o de «ONG» consiguiendo que el médico fuera con premura a casa de una familia en la que había un enfermo; o de «policía» acabando por las bravas con los pequeños rateros del barrio, actualmente hay vecinos que aún piensan que es el método más rápido y eficaz para solventar problemas.
- <sup>24</sup> Al cambio actual (1 euro=3000 pesos) el coste asciende a unos 3000 euros anuales.
- <sup>25</sup> La radio tiene una singular importancia en la cobertura del conflicto en Colombia.
- <sup>26</sup> Como indican los datos sobre homicidios cometidos en la ciudad mencionados páginas atrás.

## BIBLIOGRAFIA

- ALCALDÍA DE MEDELLÍN (2006), «Propuesta para una Política Nacional de Reinserción», en Hincapié, Á. (comp.), *Conflicto armado Medellín-Colombia. Comprensiones y acciones*, Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, pp. 125-142.
- CEBALLOS, R. (2000), «Violencia reciente en Medellín: Una aproximación a los actores», *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, número 29, tomo 3, Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.
- CENTRO DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DELITO (COSED), *Informe sobre violencia en las ciudades colombianas*, Cartagena de Indias: Policía Nacional. [www.prevencionviolencia.org.co/observatorios/bolivar/cartagena/archivos/boletin\\_cartagena\\_2004.pdf](http://www.prevencionviolencia.org.co/observatorios/bolivar/cartagena/archivos/boletin_cartagena_2004.pdf)
- CORDÓN, J. C. (2006), «Misión de apoyo a los procesos de paz. Organización de Estados Americanos MAPP/OEA», en Hincapié, Á. (comp.), *Conflicto armado Medellín-Colombia. Comprensiones y acciones*, Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, pp. 197-216.
- GAVIRIA, Jorge (2006), «Medellín. Modelo de intervención, regreso a la legalidad», conferencia pronunciada en el Seminario *Democracia, narcotráfico y paramilitarismo en Colombia*, Medellín.
- GIRALDO, A. (2006), «El conflicto armado en el marco de las parroquias. ¿Qué estamos haciendo?», en Hincapié, Á. (comp.), *Conflicto armado Medellín-Colombia. Comprensiones y acciones*, Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, pp. 17-22.
- GÓMEZ, J. (2006), «Arquidiócesis de Medellín: Experiencias y logros», en Hincapié, Á. (comp.), *Conflicto armado Medellín-Colombia. Comprensiones y acciones*, Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, pp. 35-39.
- HEIDEGGER, M. (1961), *Nietzsche I*, Pfullingen: Neske.
- MAYA, E. (2006), *Presentación de los Resultados de la primera fase del proyecto «Seguimiento y Control preventivo a las Políticas Públicas en materia de Desmovilización y Reinserción»*, Bogotá: Procuraduría General de la Nación.
- MORIN, E. (2002), «¿Una segunda mundialización?», en Jarauta, F. (comp.), *Desafíos de la Mundialización*, Observatorio de Análisis de Tendencias, Cuadernos de la Fundación Marcelino Botín, Madrid: Fundación Marcelino Botín.
- NIETO, J. y ROBLEDO, L. (2006), *Conflicto, Violencia y Actores Sociales en Medellín*, Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAUCLA).
- PAULSEN, G. (2006), «Red 14: Seguridad Ciudadana en la Ciudad. Programa URB-AL», [www.pnud.org.co/img\\_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/segiudadanaenla ciudadprogrubal.pdf](http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/segiudadanaenla ciudadprogrubal.pdf)
- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA (2003), *Texto del acuerdo de paz entre el gobierno y los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara de la AUC*, en [www.presidencia.gov.co/prensa\\_new/sne/2003/diciembre/17/01172003.htm](http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2003/diciembre/17/01172003.htm)

- REY, P. (2006), «La “Prensa Seria” y la Guerra de Irak. Presentación de un conflicto a la opinión pública», en *Información y Guerras en el Siglo XXI*, Actas del I Congreso sobre Seguridad, Información y Defensa, Segovia: Universidad SEK (Segovia) – Academia de Artillería, pp. 268-278.
- RIVAS, P. (2006), «El golpe de Estado como forma de intervención política. Mauritania, orden y desorden en el verano de 2005», *Sphera Publica*, n.º 6, Murcia: Universidad de Murcia, pp. 161-178.
- RIVAS, P. y REY, P. (2006), «El *Plan Congruente de Paz* y la superación de la violencia en Antioquia. Democracia, participación ciudadana y comunicación pública», en *VIII Foro de Otoño de Comunicación*, Madrid: Universidad Complutense (en imprenta).
- SALAZAR, A. (2006), Entrevista realizada en Medellín en septiembre de 2006.
- SÁNCHEZ, Ó. (2006), «Persuasión propagandística al servicio del envilecimiento: Comunicación para el desorden», *Sphera Publica*, n.º 6, Murcia: Universidad de Murcia, pp. 107-122.
- UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ANTIOQUIA (2005), [www.medellin.gov.co/AdmonContenido/EstadisticasGobierno/DocumentosEstadisticasGobierno/OtrosInformes/INFORME%20ANUAL%20DE%20HOMICIDIOS%202005.pdf](http://www.medellin.gov.co/AdmonContenido/EstadisticasGobierno/DocumentosEstadisticasGobierno/OtrosInformes/INFORME%20ANUAL%20DE%20HOMICIDIOS%202005.pdf)
- VELÁSQUEZ, M. (2006), «Medellín y sus violencias. Narcotráfico, milicias, bandas y Auto-defensas», p. 105, en Hincapié, Á. (comp.), *Conflicto armado Medellín-Colombia. Comprensiones y acciones*, Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, pp. 93-124.
- TODOROV, T. (1987), *La conquista de América. La cuestión del otro*, Madrid: Siglo XXI.